

Diciembre 2019 – Enero 2020

América Latina: Un balance de fin de año

Sin duda, los últimos meses del 2019 quedará en el recuerdo como uno de los períodos de mayor convulsión social y política, junto con haber reafirmado la tendencia de un continente que viene evidenciando índices de decrecimiento. América Latina finalizó el 2019 como uno de los años con menos crecimiento. El 2019, ya había sido el sexto año consecutivo de bajo crecimiento. Así fue reconocido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que constató un nivel de crecimiento en torno al 0,1%. Este bajo nivel de crecimiento no sólo ha sido consecuencia de una disminución de la demanda interna, de la demanda agregada externa y del aumento de las presiones sociales por reducir el fenómeno de la desigualdad¹. Las proyecciones para el 2020 indican un leve repunte del crecimiento, dado que se podría alcanzar tasas de alrededor de 1,3%. A la disminución del crecimiento se añade, por un lado, una desocupación promedio de un 8,2% y, por otro, un aumento de la deuda pública, la que en promedio pasó del 36,1% en 2014 al 43,2% en 2019.

En aquellos gobiernos de tendencia más conservadora, se ha optado por una integración por vía de la liberalización comercial, como había estado ocurriendo en Brasil, tras la llegada de Bolsonaro al poder, Argentina y Chile, desde marzo de 2018 en adelante. Otras vías de integración, por medio de la cooperación entre los Estados, como ocurría con UNASUR, comenzaron a ser descartadas a raíz de las discrepancias que existían entre el gobierno de Argentina y Venezuela, durante toda la era Macri, y el distanciamiento que asume Brasil desde los inicios de la gestión de Bolsonaro.

A los problemas asociados con la economía, se agrega la incertidumbre que genera el aumento de las protestas ciudadanas, después de lo ocurrido desde el mes de octubre en Ecuador, Chile y Colombia. En esos tres países, la gente salió a las calles en Ecuador, Chile a protestar frente a iniciativas adoptadas por parte del gobierno. Se trató de formas de acción colectiva con un claro tono de contestación y reacción frente a medidas específicas, aunque también frente a demandas que se venían postergando por un largo período de tiempo. A diferencia de lo ocurrido en Ecuador, que el gobierno supo atenuar retirando la medida del alza de los combustibles, en Chile y en Colombia los factores que inciden en la propagación de estallidos sociales más allá de las respectivas capitales, involucrando a gran parte del territorio nacional, tienen un arraigo mucho más profundo y por ende no remitidos única y exclusivamente a la responsabilidad del gobierno de turno.

En Chile, después del “acuerdo por la paz y una nueva constitución”, alcanzado entre el oficialismo y parte importante de la oposición el día 15 de noviembre, se dio inicio al funcionamiento de una comisión representada por juristas, politólogos y otros académicos que representaban a los partidos y organizaciones que conforman los dos bloques. El trabajo

¹ https://elpais.com/economia/2019/12/12/actualidad/1576148626_094764.html

realizado por dicha comisión se tradujo en una reforma constitucional que permitió al gobierno convocar a un plebiscito, por una nueva Constitución, en el que se incluye la pregunta por el tipo de mecanismo, que se deberá efectuar el próximo 26 de abril de 2020. Hasta el momento persisten hechos de violencia y asociados a violaciones de derechos humanos, así como situaciones de tensión originadas por las declaraciones de un grupo de senadores del bloque oficialista, que se han pronunciado en contra de la aprobación de la idea de una nueva carta fundamental. El estallido social ha dejado un saldo de críticas y cuestionamientos a la gestión del gobierno, como se evidenció en los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), en la que el apoyo al presidente alcanzó el 6%, el más bajo que se tenga registro desde que se inicia el proceso de recuperación democrática, en marzo de 1990². Además del cuestionamiento a la gestión del gobierno, la mencionada encuesta mostró un apoyo a los partidos en torno al 2% y una baja legitimidad a las instituciones representativas en general.

Respecto de Colombia, desde el día 21 de noviembre estallaron una serie de manifestaciones en diversas ciudades de ese país, que desembocaron en jornadas de paralización nacional. Entre los factores que habían desencadenado las protestas figuran algunas medidas económicas y de inversión pública adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque. También se mencionan situaciones de corrupción y el manejo del acuerdo con las FARC. En las primeras semanas, de acuerdo a sondeos realizados por Gallup, más del 70% de los colombianos respaldaba la movilización³. A diferencia del estallido social ocurrido en Chile, en Colombia el presidente Duque ofreció respuestas inmediatas. Una de ellas, la convocatoria a “diálogos sociales” con representantes de organizaciones estudiantiles, indígenas, campesinas, además de acciones encomendadas a los alcaldes y gobernadores en sus respectivos territorios.

Mientras se desencadenaban las protestas en Chile, durante los primeros días de noviembre se produjo una aguda crisis política en Bolivia que culminó con la renuncia del presidente Evo Morales, recientemente reelecto y el establecimiento de un gobierno provisional, que en rigor ha funcionado con un verdadero régimen de facto. La presidenta subrogante Jeanine Añez de Bolivia se comprometió a convocar a nuevas elecciones generales, que se supone se llevarán a cabo el domingo 3 de mayo de 2020. Ante la prohibición de presentar como candidato al expresidente Evo Morales, para esas elecciones el Movimiento al Socialismo (MAS) anunció como candidatos al exministro de Economía Luis Arce y al exCanciller David Choquehuanca, como presidentes y vicepresidente respectivamente. De parte del actual gobierno de facto, Añez anunció que competiría por la presidencia. La iniciativa de Añez, no ha logrado aglutinar al conjunto de la derecha y de los opositores al gobierno de Morales. Por el contrario, hasta la fecha, los sectores de derecha se presentan divididos en cinco alianzas, entre las que destacan aquellas que postulan, por separado, a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho. Lo ocurrido en Bolivia resulta paradójica teniendo en cuenta que

² <https://www.cepchile.cl/cep/encuestas-cep/encuestas-2009-2018/estudio-nacional-de-opinion-publica-n-84-diciembre-2019>

³ <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50674831>

durante el gobierno de Evo Morales la pobreza extrema se redujo en un 50% y el promedio de crecimiento fue de 4,6, superior al del resto del continente. Hasta hoy, diversos analistas se preguntan acerca de si hubo o no un golpe de Estado en ese país del Altiplano.

Por otra parte, el 2019 finalizó con importantes cambios en Argentina y Uruguay, tras los triunfos de Alberto Fernández y Luis Alberto Lacalle respectivamente. En ambos casos, el cambio implicó alternancia, hacia la centro-izquierda en el caso argentino, y hacia la centro-derecha en Uruguay. En ambos casos, además, el descontento y el malestar social se resolvió por la vía institucional. Argentina pareciera adoptar el mismo cauce que Uruguay al asumir la alternancia política, logrando una situación de normalización y acatamiento a los resultados electorales. Si bien la gestión de Alberto Fernández ya comenzó, tanto la de éste como la de Lacalle cifran importantes expectativas para el desempeño de sus respectivas gestiones durante el 2020. Tras la realización de las elecciones uruguayas, y declarado el triunfo de Luis Alberto Lacalle, no se han registrado situaciones de tensión sino que, por el contrario, predomina la normalidad institucional en dicho país.

En Brasil, por su parte, Jair Bolsonaro acaba de cumplir un año en la presidencia de esa nación. Las expectativas iniciales, sobre todo en términos económicos, parecen no haberse cumplido, considerando que para el 2020 se proyectó una recuperación del crecimiento hasta alcanzar el 2,2%. Bolsonaro, además, ha tenido serios problemas para asegurar el apoyo a las iniciativas legislativas, debido a lo fragmentado que es el sistema de partidos en el país carioca. En la actualidad existen 32 partidos representados en el Congreso Nacional de ese país. En el momento en que Bolsonaro comenzaba a perder apoyo popular, en la centro-izquierda brasileña se lograba revertir una situación de escepticismo que se había generado tras la detención del ex presidente Lula da Silva, liberado en noviembre de 2019. Esto ha permitido reorganizar el trabajo al interior del llamado “Partido de los Trabajadores” (PT), que este año medirá fuerzas con el oficialismo en las próximas elecciones municipales.

En el transcurso del 2020, varios países de la región deberán efectuar procesos electorales, a nivel subnacional y local. Es el caso de Costa Rica, que deberá efectuar elecciones municipales en el mes de febrero, departamentales y municipales en el mes de mayo en Uruguay, de gobernadores y municipales en octubre en Chile, y parlamentarias en diciembre en Venezuela. Pese al carácter de estas elecciones, en países como Chile, servirán para medir el nivel de descontento de la ciudadanía, a realizar con posterioridad al referéndum, programado para el 26 de abril, en el que los chilenos han sido convocados para decidir por el cambio o la permanencia de la actual Constitución.

Tendencias: Lo ocurrido en América Latina, en los últimos meses deja una serie de interrogantes sobre el destino del sistema democrático de varios países de la región. En primer lugar, se asume que no pocos países de la región atraviesan por una situación de crisis de sus respectivos regímenes democráticos, como ocurre en Venezuela, Brasil y más recientemente en Chile y Bolivia. En segundo lugar, a raíz de la caída del gobierno de Morales, el Estado de emergencia decretado en Chile, luego del 18 de octubre del pasado 2019, la interrogante es si se atraviesa por una situación de regresión autoritaria y el resurgimiento del protagonismo político de los militares, algo que llevó a autores como Huntington a fines de los años sesenta a calificar a las sociedades latinoamericanas como “pretorianas”. Por último, persiste la interrogante sobre los efectos que trae consigo la desigualdad, la reducción del crecimiento económico y los costos de la integración vía liberalización de los mercados.

